



NUE 58-A-2020 (RG)

xxxxxxx xxxxxxxx contra Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD).

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con un minuto del diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

Descripción del Caso

I. El apelante **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del **Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIP)** solicitud de acceso a la información, consistente en: “Copia Certificada de Acta de Sesión de Pleno del día 17 de diciembre de 2019”.

Al respecto, la oficial de información de dicho ente resolvió: “*proporcionar respuesta de Copia Certificada de Acta de Sesión de Pleno del día 17 de diciembre de 2019*”. No obstante, el apelante debido a que el documento le fue entregado en versión pública de conformidad a lo establecido en el art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) a efecto de proteger los datos personales de los intervinientes y demás información confidencial contenida en el mismo.

En ese sentido, el apelante solicitó la intervención de este Instituto, para que se le informará si en el punto 8 del documento en referencia: “evaluación de situación de empleado”, el empleado a que se refiere corresponde a su persona y de ser afirmativa la respuesta le sea entregado el documento de forma íntegra en atención a su derecho al derecho a la protección de datos personales que le asiste como titular de la información.

II. El apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al art. 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual fue admitido y asignado a

la Comisionada Silvia Cristina Pérez para instituir el procedimiento; no obstante, posteriormente fue reasignado al comisionado **Ricardo José Gómez Guerrero** (en virtud de su nombramiento posterior) para continuar con el trámite de este procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

III. Durante la instrucción de este procedimiento, el comisionado instructor con la simple vista de la documentación que yace agregada al expediente en comento, determinó que el procedimiento quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a la aplicación de normas y principios establecidos en la LAIP y Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el art. 102 de la LAIP y el Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que, se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso.

Análisis del Caso

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; **(II)** Consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); **(III)** Análisis sobre la información solicitada por el titular y entrega.

I. De conformidad a lo establecido en el art. 163 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en relación con el Art. 135 Inc. 3° de la misma norma, en el auto de admisión se requirió a las partes de este procedimiento, que señalaran si ofrecieran medios probatorios que no consten en el expediente administrativo a efecto de valorar la apertura a prueba del presente procedimiento. No obstante, ninguna de las partes manifestó su intención de incorporar medios probatorios diferentes a los que ya obraran en este procedimiento.

De igual forma, la jurisprudencia contencioso administrativa¹, acompaña el criterio seguido por la administración pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino

¹ Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), normativa supletoria aplicable de conformidad con el art. 102 de la LAIP referido a que “...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia”.

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, a una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el art. 102 de la LAIP y Art. 309 del CPCM.

II. El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el art. 6 de la Cn. El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Asimismo, el art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la

información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

El art. 6 letra “c” de la LAIP establece que es **información pública** aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante, los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

III. Una vez establecido lo anterior, corresponde analizar los elementos vertidos en este procedimiento para determinar la confidencialidad de la información contenida en el punto 8 del Acta de Sesión de Pleno del día 17 de diciembre de 2019.

El art. 10 de la LAIP describe en su número 25, la obligación de divulgar de manera activa las actas de los entes colegiados, como es el caso del CONAIPD, de tal forma que la ley dispone la publicidad sobre el contenido de dichas actas y, por ende, su naturaleza es pública. No obstante, si estas contienen información confidencial deberán publicarse conforme lo establece el art. 30 de la LAIP.

Para el caso en concreto, la información fue entregada al apelante en versión pública aduciendo la protección de los datos personales y demás información confidencial, contenida en el documento. Sin embargo, el apelante manifestó durante este procedimiento que deseaba conocer si el contenido del punto 8 de del Acta de Sesión de Pleno del día 17

de diciembre de 2019, se refería a su persona. Como consecuencia de ello, el ente obligado remitió oficio de referencia CONAIPD 0438-2020 de fecha 12 de marzo de 2020, por medio del cual, hizo de conocimiento de este Instituto, que al momento de tramitar el requerimiento de información realizado por el apelante se desconocía que se trataba de una solicitud de acceso a la información personal, motivo por el cual, el documento le fue entregado en versión pública.

En ese contexto, es oportuno mencionar que la LAIP además de regular el ejercicio del DAIP también garantiza el ejercicio del Derecho a la Protección de Datos en información que obra en poder de la Administración Pública. Así el art. 31 de la norma en referencia dispone que toda persona tiene derecho a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora, dicho acceso es exclusivo de su titular o su representante. De igual manera, en el Art. 43 de su Reglamento (RELAIP), establece: “el titular de la información confidencial tendrá derecho al acceso irrestricto de su información confidencial y ningún ente podrá negársele bajo ningún argumento”.

En ese contexto, el ejercicio del derecho de acceso a la información personal por parte de su titular o representante, implica: *a.* Acceder a la información personal por sí mismo, o través de un representante debidamente acreditado, solicitándola o por medio de una consulta directa en los términos establecidos en el Art. 63 de la LAIP, *b.* Conocer la finalidad con la cual fue recabada la información; es decir, el titular de la información personal tiene derecho de requerir del ente obligado, cuál es el objeto del tratamiento, *c.* La facultad de solicitar a los entes obligados de comprobar si se dispone de información de uno mismo y conocer el origen del que procede² y *d.* La de conocer la transmisión de datos a terceros, consiste en obtener del ente obligado noticia completa de a quien se le ha facilitado, con qué extensión uso y finalidad³.

² Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas con veintiséis minutos, del 4 de marzo de 2011, en el amparo de referencia 934-2007.

³ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas con veintiséis minutos, del 4 de marzo de 2011, en el amparo de referencia 934-2007.

Bajo esa premisa y considerando que el apelante no se encontraba ejerciendo su Derecho de Acceso a la Información Pública sino su Derecho a la Protección de Datos Personales, en su faceta instrumental acceso a la información, lo cual fue confirmado por el ente obligado al manifestar que el documento le fue entregado en versión pública puesto que se desconocía que el requerimiento había sido realizado por el titular de la información en él contenida, es oportuno ordenar la entrega íntegra al apelante del Acta de Sesión de Pleno del CONAIPD del día 17 de diciembre de 2019—a excepción de la información reservada o confidencial que no aludiera al apelante-.

En conclusión, es oportuno modificar la resolución emitida por la oficial de información del **CONAIPD** en el sentido que, proporcione de manera íntegra el Acta de Sesión de Pleno del CONAIPD del día 17 de diciembre de 2019—a excepción de la información reservada o confidencial que no aludiera al apelante.

Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) Modificar la resolución de referencia UAIP/CONAIPD/2020-002, emitida por la oficial de información del **Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD)**, a las dos horas cuarenta y cinco minutos del día 3 de marzo de 2020.

b) Ordenar al Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), que a través de su titular, en el plazo de **5 días hábiles** a partir del siguiente día de la notificación de la presente resolución, entregue por medio de su oficial de información, a **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** la información consistente en: Acta de Sesión de Pleno del **CONAIPD** del día 17 de diciembre de 2019, de forma íntegra; es decir, sin excepción de los datos personales del apelante consignados en la misma.

c) Ordenar al CONAIPD que, a través de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo establecido en el literal anterior, remita a este

Instituto un informe de cumplimiento de las orden contenida en el literales b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada a las y los apelantes, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio y la ejecución forzosa de conformidad al Art. 167 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

e) Remitir el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

g) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-

-----DHS-----A.GREGORI-----GERARDOJGUERRERO-----
**PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LO
SUSCRIBEN**""""""""""**RUBRICADAS**""""""""""

CT/JH